

# Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

## La sociedad civil frente a la crisis de la política [Civil society face the crisis of politics]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Franzé, Javier
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-10 23:13:15
Link to Item	<a href="http://hdl.handle.net/20.500.12424/220019">http://hdl.handle.net/20.500.12424/220019</a>

## ***La sociedad civil frente a la crisis de la política. Control y desentimiento***

Franzé, Javier

*La respuesta de la sociedad civil ante la crisis de la política parece caracterizarse por un afán de control que, no obstante, redunde en una delegación completa de la toma de decisiones. El recurso al independiente como nuevo representante y el financiamiento privado de los partidos, expresan ese desentimiento, pues alejan aún más la política de la gente común. Lo positivo de esta conducta de la sociedad ante la crisis no debe buscarse en su contenido, sino más bien en el hecho de que es capaz de sacar a la luz la crisis de las formas políticas actualmente existentes.*

---

**Javier Franzé:** Politólogo y articulista argentino residente en España; autor de El concepto de política en Juan B. Justo, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993. Miembro del consejo de redacción de La Ciudad Futura.

---

Ante la crisis actual de la política, hay un discurso de la sociedad civil que esgrime respuestas/soluciones: recurso a la sustitución del político profesional por el independiente; rechazo de la financiación pública de los partidos y confianza en la provisión privada de fondos, y, finalmente, crítica del aparato partidario como centro de operaciones de la política corrupta. Todos estos remedios aparecen dominados por un criterio común que les otorga coherencia interna: se trata de la ambigüedad con que la sociedad civil aborda su relación con la sociedad política. En efecto hay una oscilación entre control y desentimiento: se reclama el acercamiento de la política a la ciudadanía, pero se recurre a la figura del independiente para conseguirlo; se demanda que las formaciones políticas representen las expectativas de la sociedad civil y que no sean un mero instrumento para la satisfacción de los apetitos egoístas de los políticos, pero se imagina que la financiación privada de los partidos llevará a la solución; y, finalmente, no aparece una voluntad explícita de hacerse cargo de la política, es decir, se mantiene la protesta dentro de los límites del sistema representativo (democracia indirecta), pero se demoniza al aparato partidario en tanto tal, no sólo su burocratización actual.

### ***Financiación privada y acción pública***

En abril de 1993, la ciudadanía italiana se pronunció en un referéndum sobre, entre otros temas, la financiación pública de los partidos políticos. Nueve de cada diez votantes dijeron «no». Este resultado abrió las puertas a la financiación privada de los partidos, a través de donaciones personales. El «no» italiano es paradigmático en tanto muestra cómo el rechazo a la clase política ha podido más que la voluntad de reformular la vida política. En efecto, ese rechazo viene marcado por la percepción de que los políticos se han vuelto incapaces de representar la voluntad popular, de realizar el interés de sus votantes, del que se servirían para acceder a lugares de poder desde donde satisfacer sus propios intereses. En fin, el rechazo se apoya en una visión del político como alguien que no cumple su función, la de mediar entre sociedad civil y Estado, y que por el contrario se sirve del Estado para sus fines privados.

Es esto último lo que se ha querido sancionar, en tanto se ve la financiación pública de los partidos como el origen de esa utilización del Estado para fines particulares. Pero, ¿es la financiación privada una solución para esto? Lo que se ha llamado financiación pública lo era sólo en la medida en que efectivamente se utilizaban dineros estatales, pero no en tanto se hacía de un modo transparente, de cara a la sociedad civil. Pero el discurso crítico de la sociedad ha operado desplazando la problemática de los medios fraudulentos de financiación a la financiación pública en cuanto tal. Para cerrar la posibilidad de la utilización particularista del Estado, no deja de ser interesante que la sociedad haya optado por obstruir la provisión pública de fondos a los partidos, en lugar de demandar su derecho a controlar lo público, con el objeto de terminar con el fraude que se venía realizando. En nombre de la recuperación de la política para la sociedad civil, este discurso abandona las posiciones que le corresponden en cuanto a derechos de control y opta, al fin, por confiar a la esfera privada la provisión de fondos para los partidos.

Si se considera la publicidad - y no la propiedad - como piedra de toque del concepto de lo público, aun cuando se esté hablando de lo estatal, se podrá afirmar que, en verdad, tal malversación significaba la privatización de la financiación, al tornar la utilización del dinero público un acto oscuro, opaco, ensombrecido: en fin, carente de toda mínima visibilidad e incontrolable para sus sostenedores, los ciudadanos.

Al abolir la financiación pública de los partidos se tiende, contra lo que parece, a consagrar un modo de hacer política que, como el actual, se caracteriza por la

corporativización o repliegue sobre sí de la sociedad política. Si se privatiza la provisión de fondos partidarios, y siempre dentro del esquema representativo indirecto existente, se aleja toda posibilidad de que la clase política sea controlada por la sociedad civil, de que responda ante ésta por sus actos. Más aún, se produce un brusco giro en la imagen que la sociedad tiene de sí misma en cuanto a su papel político, pues se disuelve en la conciencia ciudadana la noción de que los partidos son organizaciones de la sociedad civil, instrumentos de que ésta se provee para colocar su interés en el Estado. La privatización de los fondos partidarios construye la imagen de las formaciones políticas como empresas, como sociedades privadas, cuya actividad se caracteriza por ser autocentrada, y de responsabilidad pública sólo al final del proceso de elaboración del producto que ofrecen, mas no durante el tiempo de producción; es decir, todo lo contrario de lo que por definición constituyen los partidos, asociaciones civiles al servicio de las necesidades de la ciudadanía. Se podrá aducir que esta definición de partido político ha quedado como letra muerta: aun así, este discurso crítico no se ha apropiado de esa teoría que, incluso si ha devenido hoy pura abstracción, coloca la representación política como emanación de los derechos ciudadanos, y por tanto sitúa en el centro de la vida política a la sociedad, lugar de mucha mayor fuerza reivindicativa para reformular las formas institucionales que el que otorga un panorama político dominado por la esfera privada, que es precisamente el que tiende a construir este discurso que abandona el control de lo público. El argumento de que si se privatizan los fondos partidarios se evitará que los políticos malversen dineros que no les pertenecen y que tampoco les han sido donados, conduce recto al error del cual se quería - presumiblemente - huir: que los políticos adopten modos corporativos de actuación.

La privatización de los fondos logra efectivamente que la sociedad civil se independice de los políticos: este es el problema. Pues esta independencia no es a costa de los políticos actuales, sino de todos: de la clase política como tal. Y, mientras no estén en juego formas directas de actuación política, esto implica que los ciudadanos se quedarán sin representantes, sin voz ante el Estado y el mercado. Si la voluntad primera de la sociedad es no sólo rechazar los modos actuales de hacer política, sino también producir una reformulación de la vida política que se caracterice por una mayor gestión ciudadana de los asuntos públicos, al pretender lograrlo a través de la abolición de la financiación pública de los partidos, no se está haciendo otra cosa que producir una subsunción de la clase política en el mercado (financiación privada) y, precisamente a consecuencia de esto, generar una pérdida de toda autonomía, que es la base de la capacidad de mediación entre sociedad civil y Estado, función esta que se quería recuperar. Dar al mercado no es

dar a la sociedad civil, sino a quienes lo hegemonizan<sup>1</sup> . Aquí se ve esta ambigüedad entre control y desentendimiento que parece caracterizar las conductas civiles ante la actual crisis de la política.

Lo opuesto a lo malo no es necesariamente bueno. La financiación privada de los partidos, en tanto lo opuesto a la financiación pública, no sólo no es mejor que ésta, sino que por el contrario agrava sus vicios. Porque, al fin, la financiación privada no es sino la continuación (por otros métodos) de la financiación pública, tal como ésta se ha venido dando.

La privatización de los fondos logra efectivamente que la sociedad civil se independice de los políticos: este es el problema.

### ***¿Independiente o notable?***

Como se ha dicho, la otra solución emergente de esta crisis es el recurso a la personalidad independiente, no-política. Este remedio se asienta en un supuesto valorativo, según el cual el independiente acerca-la-política-a-la gente. El encadenamiento argumental es visible: dado que el independiente no está ligado a los aparatos partidarios, se encuentra en condiciones óptimas de percibir y realizar los intereses de la sociedad civil. Asimismo, como también es independiente ideológicamente, resulta más pragmático y por tanto más desprejuiciado a la hora de elegir soluciones. En fin, la doble independencia del independiente (partidaria e ideológica) lo convierte - según esta casuística - en la figura idónea para gestionar los asuntos públicos.

Sin embargo, hay una pregunta - fundamental en una sociedad de mercado, esto es, presuntamente meritocrática - que queda sin formular: ¿cuál es la capacidad del independiente para la nueva profesión que se le ha encomendado? Que esta pregunta no resulte pertinente a los ojos de la sociedad civil, revela el predominio de la creencia en el vínculo dirigente-dirigido.

---

<sup>1</sup>Es notable que la preocupación existente por la corrupción no incluya la financiación privada de los partidos, en tanto fuente potencial de corrupción del mandato civil expresado en las urnas. No está muy alejada la posibilidad de que la financiación se traduzca, finalmente, en una inversión: colocación de capital en el sistema político (partidos) para obtener prebendas o, más directamente, legislaciones adecuadas al inversor en cuestión. La financiación privada no sólo no aleja el problema de la corrupción, sino que, por el contrario, agrega a la corrupción «económica» la corrupción «política»: malversación del mandato civil por medio de la presión de lobby. En Italia se legalizó la financiación pública de los partidos en 1974, luego de descubrirse que el presidente de la Unione Petrolífera había financiado a los partidos de gobierno a cambio de obtener prebendas estatales.

En efecto, si toda relación dirigente-dirigido, o líder-masa, comporta elementos racionales e irracionales entrelazados, la sustitución del líder político clásico (el dirigente salido del partido) por el independiente (personalidad pública que en virtud de esa reconocida capacidad en su oficio salta a la política) elimina los elementos racionales que aparecían en la relación clásica.

La creencia en el carisma del líder político clásico se apoyaba en las virtudes imaginarias que la sociedad civil encontraba en la personalidad del líder. Estas virtudes no eran técnicas ni referidas a un saber, sino que emanaban directamente de la personalidad, del carácter, de los rasgos incluso físicos. Pero, no obstante, estaban evaluadas en función de la actividad política. Esto es, se pensaba que tal o cual dirigente tenía carisma para ser un líder político. El costado racional del vínculo era el programático: no sólo bastaba con ver si tal político tenía caracteres de líder, sino que había que evaluar qué iría a hacer una vez en el gobierno. Aquí aparecía el partido, como garante de una orientación ideológica históricamente definida, en función de la cual se construía un programa. La prueba de que el carisma no era suficiente es que, en general, había consenso respecto de cuáles políticos tenían o no virtudes de líder, pero no por eso se los votaba. Nadie dudaba en Francia que De Gaulle fuera un líder carismático, pero no todos los que reconocían este magnetismo lo votaban, pues no acordaban con su programa.

Aquí interesa observar que lo que de racional tenía el vínculo masa-líder implicaba un elemento de control de la sociedad civil respecto de la sociedad política. Los partidos políticos son concebidos como encarnaciones de necesidades sociales, las que se plasman más o menos objetivamente en programas, esto es, en las bases ideológicas y en las plataformas electorales. La lealtad del líder al partido era el modo que los electores tenían para controlar la observación por parte de aquél del mandato que éstos le habían dado en las urnas. Esto, claro, en el marco de una democracia representativa, en la cual el elector no gobierna sino a través de sus representantes. Otra vez, se podrá argüir que ese control a través de los programas y de la identidad ideológica partidaria era débil y manipulable por el representante, pero lo central para nuestro análisis es que el malestar actual no va en camino de recuperar tal control, sino más bien de renunciar a él por completo. Eso es lo que está ilustrando el independiente.

El independiente se ha liberado de toda regulación partidaria, precisamente porque es un alguien venido de fuera de esas estructuras. También de la orientación ideológica de su acción, al punto que los independientes más apetecibles en un momento dado son disputados por varios partidos a la vez. E,

incluso, los dirigidos ya no se preguntan por sus cualidades respecto de la política como actividad específica. Así, no sólo se ha evaporado el costado racional de la preferencia por el dirigente, al desvincular al independiente de toda regulación partidaria, sino que el costado irracional, el de la creencia en el dirigente en función de su carisma, ya no tiene relación alguna con su profesión de político. En efecto, ahora el independiente cosecha su carisma en su oficio respectivo, y precisamente porque tiene carisma en su profesión primera - la que lo convierte en un personaje público - es que resulta elegido para saltara la política. Pero nadie se interroga por los caracteres de su personalidad en función de la actividad política, es decir, si son idóneos o no para ser un líder político. El político clásico, además de dirigente partidario, tenía que poder ser un buen líder político, mientras que el independiente actual le basta con haber sido un cantante popular, juez destacado o deportista brillante para poder transformarse en un líder político.

Es paradójico que el nuevo dirigente político, el independiente, se vea relevado por la sociedad civil de toda capacidad política y de todo carisma de líder político, precisamente cuando la propia sociedad dice buscar dirigentes a los que pueda controlar. El independiente ya no es controlado por nadie, ni por el partido, ni por la sociedad civil a través de los programas, ni siquiera por la exigencia social de que cumpla con ciertas cualidades (carismáticas e intelectuales)<sup>2</sup>. Le basta con su magnetismo de origen, esto es, en tanto que cantante o juez o deportista. Ya no debe conquistar a las masas desde la política, es suficiente con que las haya seducido en un escenario, en un estadio o en la arena de los medios masivos. En fin, su personalidad arrolladora pulveriza la mediación política, y con ésta cae el control de la sociedad. El malestar civil respecto de la dirigencia política, expresado en el rechazo de la financiación pública de los partidos y en el recurso al independiente como sustituto del político profesional, parece recrearse en una máxima: quien haga política debe vivir para la política y no de la política<sup>3</sup>. Es decir, quien haga política debe entregarse a la causa que lo anima, pero no pretender vivir de ella, ni de buena ni de mala manera. Es más, el ser capaz de vivir para la política sin pretender vivir de ella, constituye - a los ojos de este

---

<sup>2</sup>El hecho de que el independiente no necesite demostrar su valor en tanto que político, genera otra consecuencia: la pérdida de conciencia de que la política en tanto que actividad supone una ética específica, nutrida de la tensión weberiana entre convicciones/principios y sentido de la responsabilidad. Como el independiente no necesita despojarse de su profesión de origen para ingresar en el mundo de la política, opera en éste según los cánones propios de la ética de su profesión. Esto acaba por reforzar la creencia civil de que para regenerar la vida política es necesario dotar a ésta de más principismo, romanticismo o una suerte de premeditada ingenuidad, esto es, de valores propios de una ética que no necesita atender a las consecuencias que sobre terceros - a corto y largo plazo - puede tener una acción, que es lo que distingue a la ética política.

<sup>3</sup>Esta distinción es deudora de la formulada por Max Weber. V. «La política como profesión» en La ciencia como profesión. La política como profesión, Espasa Calpe, Madrid, 1992.

malestar civil - la prueba suprema de la vocación de servicio del político, de su verdadero interés por los problemas de la sociedad civil. Esta premisa es el valor que orienta la conducta civil que echa mano a los independientes para sustituir al político clásico y que pone en entredicho la legitimidad de la financiación pública de los partidos.

El independiente constituye la figura paradigmática que encarna esa exigencia civil de vivir para y no de la política. El independiente tiene su vida material resuelta al margen de la actividad política, no necesita de los provechos materiales que ésta le pueda dar. Así, desde su posición de personaje público, ya conectado imaginariamente con la voz y los deseos populares, no se vuelca a la política para revalorizarla como actividad, antes al contrario se coloca fuera de ésta: su ingreso en la vida estatal es más bien una continuación del vínculo iniciado con la ciudadanía en su profesión originaria.

También el cuestionamiento de la financiación pública de los partidos brota de esta expectativa/preensión de que el político viva para y no de la política. En efecto, la sociedad civil busca de este modo desembarazarse de la idea de que financia a los políticos quienes, además, malversan no sólo su capital sino también su voluntad política. Así, los conmina a buscarse su propio sustento, es decir, a obtener sus ingresos en el ámbito privado. La sociedad civil busca de este modo obligar al político a cumplir los mandatos sin financiar la actividad necesaria para que ello pueda ocurrir. La sociedad se libera imaginariamente de la losa de una presunta complicidad con su estafador, el político profesional.

La expectativa de que el político viva para y no de la política se apoya en una noción romántica de la política como actividad, según la cual el interés ideal (la causa, el vivir para) debe subordinar al interés material (el vivir de). Se exige de la política lo que no se exige (ni se consideraría razonable exigir) a cualquier otro oficio: que se despoje de su carácter de profesión <sup>4</sup>. Todo profesional se define por el hecho de ejercer su oficio a cambio de una remuneración: es decir, porque su trabajo se realiza tanto en función de un interés ideal (vocación para el oficio)

---

<sup>4</sup>«Político profesional» ha adquirido un sentido peyorativo. Es interesante observar que sólo cuando califica a la política, el adjetivo «profesional» cobra un sentido negativo. En efecto, si se afirma que un médico «es un gran profesional», el objeto es resaltar su capacidad, su saber. Incluso cuando se lo utiliza para calificar a un ladrón, el adjetivo «profesional» conserva un sentido positivo: si se dice de alguien que es un «ladrón profesional» (aquí no importa que sea un saber respecto de una actividad considerada negativa, como el robar), lo que se quiere afirmar es su gran capacidad, una habilidad que supera la media, la de los amateurs. En fin, mientras el médico o el ladrón que son «grandes profesionales», representan la máxima expresión de su profesión, el «político profesional» - por el contrario - es la contracara del verdadero político. Esto demuestra que aún hoy no se acepta que, para la política, vocación y profesionalidad puedan ir juntas, como en cualquier otro oficio.

cuanto de un interés material (expectativa de vivir de ese oficio). ¿Por qué ver entonces en la profesionalización de la política el primer elemento de corrupción de la actividad, cuando no se percibe lo mismo para cualquier otro oficio? ¿Por qué la causa política exigiría una asepsia que, por ejemplo, no se ve como necesaria para la causa de curar? No resulta muy desacertado afirmar que la mayoría de los médicos no trabajaría si no fuera porque vive de la medicina, además de para ella, y esto no cuestiona en absoluto su vocación de servicio.

Hubo un tiempo en que el político vivía para la política y no de la política. Era la época de los notables, gran burgueses o aristócratas que, en función de su fortuna personal, se dedicaban a la actividad política como prolongación de la defensa de sus intereses particulares y de clase. Era el tiempo en que las masas no participaban en la vida pública, y el voto censatario (excluyente, parcelado en función de la propiedad) alejaba el fantasma horrible de negociar los asuntos públicos entre intereses contrapuestos. No había, en fin, cuestión pública, pues ésta era absorbida/diluida en los intereses de la clase dominante. El Estado era una oficina más de la administración aristócrata. La época de los notables se caracterizaba precisamente por no concebir la política como una profesión. No era necesario vivir de la política, porque la posición de clase aseguraba la resolución de la vida material. Pero sí era necesario vivir para la política, a fin de poder seguir administrando el Estado y lo público como algo enteramente propio, de clase.

Fue precisamente la profesionalización de la política lo que rompió esa oligarquización del manejo estatal.

La época en la cual la política no fue una profesión, fue el tiempo en el cual menos vocación por la política tenía quien la ejercía. El vivir para y no de la política no sólo no era un índice de la vocación del político, sino que, por el contrario, era la señal de un desprecio completo por la política como actividad pública, pues sólo se la entendía como una mera prolongación de la administración de los propios intereses particulares. Lo que generó ese modo no profesional de realizar la actividad política no fue una mayor transparencia y eficacia, sino un absoluto manejo corporativo-clasista de lo público. Fue precisamente la profesionalización de la política lo que rompió esa oligarquización del manejo estatal, y permitió un grado mayor de igualdad en el acceso a la vida política por parte de los ciudadanos, pues tal profesionalización aseguraba el vivir de la política, y así resolvía el lado material de su existencia a quienes no poseían capital<sup>5</sup>. Era la

<sup>5</sup>El caso paradigmático de este acceso igualitario a la política para aquellos desprovistos de capital es el de los líderes surgidos del mundo obrero, tales como - por citar sólo dos ejemplos - August Bebel o Pablo Iglesias.

separación entre capital y vida política. A consecuencia de esto, el Estado devino una arena de negociación de los intereses sociales contrapuestos (sin por ello borrar toda hegemonía de clase), y ya no un puro comité de administración de los intereses de los grupos hegemónicos.

La vocación por la política se prueba en el afán no sólo de vivir para ella sino también de ella, porque - en el plano subjetivo - es ahí donde se deja ver lo que de apuesta vital comporta tal elección, y también porque - en el plano social-histórico - es de esa manera que se asegura, a través de la ampliación de la posibilidad de acceder a la política como actividad, una defensa de la representación de los intereses de los sectores subalternos.

### ***La burocratización como exclusividad de la política: el aparato***

Del rechazo del político profesional se deriva la demonización del aparato partidario, pues la actual crisis de la política está siendo presentada (y entendida) no sólo como una problemática que atañe exclusivamente a la política en cuanto tal, sino además como crisis de los políticos. Esto genera un doble efecto de comprensión: por un lado, un reduccionismo personalista de la cuestión, y por otro, la tendencia politicista del enfoque se expresa en la visión de los aparatos partidarios como causa de la crisis. De este modo, la conducta personal de los políticos aunque en su dimensión pública, es decir, como signo de ese estatuto excluyentemente político de la cuestión - deviene el centro del problema. Ejemplo paradigmático es el de la corrupción, en tanto es percibida, por una parte, como un fenómeno exclusivamente político y, por otra, como mera maniobra personal del dirigente, dirigida a su propio provecho. La solución inmediata a la que recurre la ciudadanía es coherente con este modo de comprender el problema: se recurre al reemplazo del representante, en este caso al del político profesional por los llamados independientes. Al contemplar el problema como un asunto de conductas y actitudes personales, se espera que la solución provenga del recambio de éstas. Lo que le permite, sin reformular la representatividad, a la vez descontaminar esa relación del bacilo político: el independiente actúa como factor despolitizante y, por eso, regenerador de la salud pública.

En cuanto al segundo punto, los aparatos partidarios son vistos como el origen de la crisis de la política en la medida en que son el lugar donde desempeñan sus tareas estos políticos antes descriptos. El aparato queda involucrado por extensión, es decir, por ser la prolongación estructural de esa conducta personal (negativa) del político profesional. El aparato partidario aparece como puro centro de

operaciones de una política oligarquizada, puesta al servicio de los políticos y no de la ciudadanía. Es una suerte de instrumento perfecto para una política pérfida: oculta información, sirve para controlar a la masa, para presionar sobre las instituciones, para proteger al político de la justicia y, asimismo, para encubrir negociados. Se diría que es al político lo que «la familia» a los miembros de la mafia.

### ***Discurso crítico e institucionalidad liberal***

Hemos descrito el discurso (como suma de la visión y de las conductas ante la crisis) del malestar civil respecto de la política a partir de tres cuestiones: la de la financiación de los partidos, la del independiente y la de la crítica del aparato partidario. Se ha dicho que la sociedad civil tiende a adoptar frente a ellas una actitud ambivalente, consistente en formular una crítica desde la reivindicación de rehacerse con la gestión política y, simultáneamente, adoptar prácticas/decisiones que arrojan la política aún más lejos de donde se situaba, en tanto se confía su control antes a la esfera privada que a la propia actividad societaria.

Es posible entonces precisar qué supuestos están actuando detrás de este discurso, a fin de intentar definir en qué sentido resulta coherente a los ojos de la sociedad que lo está produciendo. Tanto en el caso del independiente cuanto en el de la financiación, hemos visto que la crítica de lo existente sirve como apoyatura no para restituir lo que ha desaparecido, sino para desligarse por completo de él. En otras palabras, no se intentan reformular/reconstruir los lazos sociedad civil-política, sino que se recurre a remedios que, en la creencia imaginaria de que sí transformarán esa relación, no hacen sino profundizar la mediación antes existente. ¿Cuáles son los supuestos que alimentan esa visión imaginaria de recuperación de la política para la sociedad?

En primer lugar, dos asimilaciones simétricas y complementarias: por un lado, lo público como lo estatal, y, por otro, lo social como lo privado. Desde aquí se imagina que dar a la sociedad civil consiste en quitar al Estado para dar al mercado. El ejemplo más acusado es el de la financiación de los partidos. Se suspende la provisión estatal de fondos y se la confía al mercado, esto es, a las fuerzas del capital que lo hegemonizan. Y esto en razón de otorgar mayor transparencia a la financiación. Aquí se ve que la publicidad (el hacer algo público, visible) no es comprendida como un atributo de lo público, sino mas bien de lo privado, y que por tanto lo público queda como lo meramente estatal, como lo perteneciente al Estado. Es decir, como una cuestión antes cuantitativa (de

propiedad) que cualitativa (de modo de tramitación). La sociedad civil no se apropia de lo estatal, pues este mundo es visto como algo radicalmente separado y extraño, lejano, que nada tiene que ver con la lógica social. Esta aparece más bien representada por los mecanismos de mercado, los que en función de su automatismo y autorregulación serán capaces de disciplinar y colocar bajo la férula social al mundo de la política. No hay reformulación de la representatividad en crisis, sino una resituación imaginaria de las reglas de la política bajo las reglas del mercado, como modo de recuperar el control sobre ella. La resituación es imaginaria, decimos, porque el mundo de la política ya está en ese lugar, ya se encuentra regido por las reglas de mercado y, además, porque no es a través de esas reglas que la sociedad recuperará en todo caso el control de la política, sino más bien al contrario: será el mercado el que reforzará su control sobre la sociedad, gracias a sujetar el único medio de colocación de la voluntad ciudadana en el Estado, la política.

Los políticos no han devenido irrepresentativos porque son corruptos, ni los aparatos partidarios por haberse burocratizado.

El recurso a la figura del independiente también se apoya en esos dos supuestos simétricos y complementarios antes nombrados. Nuevamente en este caso se piensa la posibilidad de retomar el control mediante mecanismos ajenos al mundo de la política, universo que queda contrapuesto con el de la sociedad. En efecto, el independiente es alguien que pertenece a la sociedad y no a la política, en eso se basa tanto su carisma cuanto su posibilidad de actuar en el Estado. Su éxito ha sido cosechado en la sociedad a través de su éxito de mercado. No se trata de restituir los lazos debilitados con la sociedad fortificando la política, sino de sustituir (aunque más no sea simbólicamente) la lógica política por la de la sociedad-mercado: el independiente prescinde de la política, material y simbólicamente; le basta con su vínculo personal, privado, que lo une a la ciudadanía y ha sido generado por fuera de los circuitos políticos. Se trata de hacer imperar ese tipo de vínculo por sobre el que genera el mundo político.

En el abordaje de la cuestión del aparato partidario, el discurso civil se sustenta en presupuestos que se derivan de los que acabamos de describir. Si en el tema de la financiación y en el del independiente lo social aparece asimilado a lo privado tanto como lo público a lo estatal, y ambas analogías contrapuestas, en este caso las distinciones son llevadas más lejos: la contraposición es ahora entre Estado y sociedad, y entre política y economía. De éstas se deriva la visión politicista sobre la crisis. En la medida en que se aísla causalmente lo que sucede en la esfera

política de lo que pueda ocurrir en el ámbito social-histórico, los caminos explicativos que restan son pocos y estrechos. En primer lugar, queda sin responder una pregunta: ¿por qué ahora?; esto es, ¿por qué los políticos y sus aparatos se han vuelto hoy irrepresentativos a los ojos de la sociedad civil?; ¿por qué fueron representativos durante tanto tiempo y ya no lo son más? El que se pueda situar cronológicamente la crisis de representación, está de por sí poniendo en entredicho esa presunta ontología burocrática de lo político que tiende a presentar este discurso civil.

De todos modos, si se sigue esa línea argumentativa, según la cual la crisis actual de la política es - ante todo - crisis de los políticos, no se podría sino argüir que se ha operado un súbito cambio de humor en los dirigentes, quienes del día para la noche se han puesto de acuerdo para hacer de la política un mero instrumento para sus apetitos egoístas. También hay otra respuesta posible, más cercana a las tradiciones anarquista y soreliana, que rechazan la política profesional de inicio, tachándola de constitutivamente perversa: ésta diría que los políticos han procedido siempre de modo egoísta, sólo que hoy esto se habría hecho evidente. Ambas respuestas comparten, de todos modos, un supuesto: colocan al político como pura voluntad autónoma respecto de la sociedad civil, desconectada de sus necesidades, autocentrada y capaz de realizar sus fines (perversos) como si actuara en un vacío social-histórico. Ven la política suspendida sobre sí misma.

La visión citada - en razón de su politicismo - toma por causas las consecuencias de esta crisis. A los fenómenos que son manifestaciones de la crisis (políticos irrepresentativos, aparatos partidarios burocratizados) les atribuye capacidad para generarla. En efecto, sólo si se concibe lo político como variable independiente (y ya no como relativamente autónoma) de lo social-histórico, se puede pensar al aparato partidario y a los políticos (incluso los corruptos) como el origen de la actual crisis. Los políticos no han devenido irrepresentativos porque son corruptos, ni los aparatos partidarios por haberse burocratizado. Más aún: se podría hacer el ejercicio de pensar que es al revés. Y, así, que los elementos negativos que aquéllos contienen (el potencial de burocratización en el aparato y el de corrupción en el político), que siempre están en mayor o menor grado presentes, se vuelven patentes y omnipresentes sólo cuando se rompe el vínculo que une a la sociedad política con la sociedad civil. Esto es, cuando las demandas/expectativas de la sociedad civil ya no son recogidas por la sociedad política, lo que equivale a decir que los ciudadanos no se sienten representados por los políticos.

La burocratización (a nivel del aparato) y la corrupción (a nivel del dirigente) podrían ser tomadas, entonces, como expresiones de lo mismo: de la política puesta al servicio de los políticos, como fin en sí misma y no como medio para plasmar las demandas sociales. Pero toda política, en la medida en que se trata de una relación de dominio (contenida en la de representación), supone algo de esto. Pero cuando esta relación de dominio sirve también a la realización de las demandas de la sociedad civil, el elemento de burocratización y de corrupción queda en un segundo plano, aunque no desaparece. La función de representación eclipsa la de dominio. El recurso al independiente está poniendo de manifiesto también que el discurso del malestar cree en la posibilidad de una relación gobernante-gobernado transparente, exenta de todo dominio, en la cual la representación no sufra interferencias. La burocratización se hace visible, se vuelve pura oligarquización, sólo cuando tiene lugar una crisis de representación, y no a la inversa, como supone este discurso crítico. Entonces sí la política aparece a los ojos de la sociedad civil como actividad autorreferencial, como mera dominación de los políticos: la sociedad siente que la política ya no le sirve, y que por el contrario son los políticos los que se sirven de la política para imponer sus intereses de grupo a la sociedad civil. Sin embargo, contra lo que se cree, este grado de burocratización no es tampoco la panacea del político profesional, aun cuando parezca la situación ideal para satisfacer su presunto apetito egoísta. Es que incluso suponiendo que el político profesional fuera constitutivamente egoísta, la burocratización de su actividad, al impedir que se cumpla la función de representatividad, lo deja a merced del rechazo absoluto de la sociedad civil (crisis de legitimidad), y, así, acaba frustrando la posibilidad de obtener prebendas de su actividad. Para desempeñar su profesión, y aunque lo haga sólo para sacar provecho de ella, el político debe satisfacer la expectativa de representación que la sociedad deposita en su persona.

Como se ha señalado, la personalización de los casos de corrupción (que no es más que un índice de la personalización de la vida política en general) contribuye a generar la imagen de que el aparato es un problema de actitud de quienes lo controlan y no de estructuras. Como contrapartida, aleja la posibilidad de ver la cuestión del aparato partidario como una problemática que está inscrita en un problema más amplio, el de la burocratización de la vida social en general. Y, en tanto burocracia, la evolución del aparato no puede ser entendida como una problemática que responde a una especificidad de los procesos políticos. El aparato es una burocracia más dentro de la vida social-institucional. El discurso crítico la enfoca, sin embargo, como la burocracia única y por excelencia. El aparato no puede ser evaluado sino como parte de un todo, que es la burocracia institucional

pública y privada. Es la política la que ha sido alcanzada por la burocracia, y no al revés.

Aquí cabría, entonces, hacer una distinción que este discurso crítico no formula, entre burocracia y burocratización. Pues si se rechaza la especificidad política de la burocratización, lo que hay que investigar es por qué la burocracia (política) se ha burocratizado, es decir, por qué se ha vuelto actividad ritualística y morosa, que, tal como en cualquier dependencia institucional, ha llegado a endiosar el trámite en desmedro del objetivo/fin. Los aparatos partidarios son antiguos: su constitución data de la época del surgimiento de los partidos de masa, entre fines del XIX y principios del XX, precisamente cuando la política se vuelve una tarea específica que requiere dedicación profesional, y deja de ser un mero apéndice del rol de aristócrata, del patrimonio personal. Es la complejidad de la sociedad de masas la que requiere centralización administrativa y actuación de un staff de expertos, tanto para gestionar lo público cuanto lo privado. El carácter de burocracia que tomaron los aparatos, no les impidió realizar la función de representación (de hecho, han contado con legitimidad durante largo tiempo). Es hoy cuando esa legitimidad ha caído; los aparatos han pasado de representar a las masas a que éstas se sientan oprimidas por ellos: en fin, se han burocratizado.

Habrá que buscar el origen de esta burocratización/crisis de legitimidad en la crisis de la sociedad que generó esas necesidades que se tradujeron antaño en formaciones y programas políticos. El cambio de necesidades hace que los antiguos gestos eficaces de la clase política hoy devengan ademanes vacíos. No azarosamente los estudios realizados sobre este tema enfatizan el cambio de la realidad social a representar por los circuitos políticos, caracterizado por una fragmentación de las demandas <sup>6</sup>. Para recuperar la legitimidad, es muy probable que a la clase política le baste con sacudirse la burocratización, sin tener que abandonar necesariamente por ello su carácter de burocracia.

En este discurso crítico, la burocratización y la corrupción no dejan ver el grado en que la caída de la sociedad industrial está contribuyendo a la crisis de representatividad. Ni el modo en que la difuminación de las relaciones sociales que la época industrial albergó, se está traduciendo en las estructuras organizativas de la política. Piénsese simplemente en cómo impacta en la constitución de las clientelas partidarias la gradual desaparición del trabajo manual industrial, o, por ejemplo, los cambios en la composición de las clases medias, y, finalmente, la

---

<sup>6</sup>Antonio J. Porras Nadales: Representación y democracia avanzada.

orfandad representativa de los nuevos sectores marginados del mercado laboral (desocupados, inmigrantes, pensionados)<sup>7</sup>.

El cambio en la estructura de clases, con la emergencia de nuevos actores sociales, modifica las necesidades sociales, las demandas societarias. Y el desfasaje entre éstas y la clase política presiona sobre los instrumentos con que se contaba para tramitarlas: los partidos políticos hasta ahora existentes. Aquí se ve que la política no es la realización de la voluntad autónoma (perversa o no) del político, sino la expresión - más o menos ajustada - de necesidades sociales. La actual es una crisis de época, el fin de la forma en que lo político se expresó y experimentó durante decenios<sup>8</sup>. Es crisis de la política, no de lo político, y en tanto tal reclama nuevas formas de mediación<sup>9</sup>.

Los supuestos que hemos aislado como bases del discurso crítico de la sociedad civil acerca de la crisis de la política nos permiten ver cómo la lógica de la representación existente impacta en las propias prácticas y discursos de la ciudadanía sobre la crisis. Es decir, cómo el sitio que el esquema de la democracia representativa asigna al ciudadano, conforma a su vez la visión de éste respecto del mundo de la política, y por tanto el modo de pensar las soluciones para las crisis que ese mundo a sus ojos pueda atravesar. Tal como señala Macpherson, «la forma más importante en que todo el conjunto de instituciones y relaciones sociales configura a la gente como factores políticos se encuentra en la manera en que configuran la conciencia que tienen las gentes de sí mismas»<sup>10</sup>.

El par de supuestos simétricos y complementarios citados, según el cual lo social es lo privado y lo público lo estatal, que dijimos que alimentan el discurso civil sobre la financiación y el independiente, están conectados con ese otro par (el Estado contrapuesto a la sociedad, y la política a la economía) que sostiene los enunciados sobre el aparato. En efecto, si se supone la escisión política-economía y Estado-sociedad, y se asimila la política al Estado, se confirma que lo público es lo estatal:

<sup>7</sup>Al respecto, v. José Félix Tezanos: «Transformaciones en la estructura de clases en la sociedad tecnológica avanzada» en *El socialismo del futuro* N° 6, Madrid, 1992, pp. 65-84.

<sup>8</sup>En Italia, por volver al hasta ahora más elocuente escenario de la crisis, no sólo se suicidan los políticos, sino también los empresarios. Esta luctuosidad en cadena expresa - de modo impensadamente contundente, claro está - que la crisis es política sólo en la medida en que ésta sea vista como el modo de articular Estado-mercado-sociedad civil, y no como la sola relación Estado-sociedad civil, visión que coloca al mercado como una suerte de «primer motor inmóvil», ajeno a toda terrenalidad y siempre trabado en su infinita potencialidad creadora por las burocráticas fuerzas estatales.

<sup>9</sup>Jorge Benedicto y Fernando Reinares: «Las transformaciones de lo político desde una perspectiva europea» en *Las transformaciones de lo político*, pp. 9-34.

<sup>10</sup>C. B. Macpherson: *La democracia liberal y su época*, p. 14.

esto es, que la política es un mundo ajeno a la sociedad, propio del Estado; lo estatal agota lo público, no hay intercomunicación Estado-sociedad. Lo propio del Estado es lo político, y lo de la sociedad el mercado, la economía, lo privado.

Esta escisión de dos mundos constitutivamente opuestos, dotados de lógicas que no se influyen mutuamente, guarda una semejanza fuerte con el universo conceptual que edificó el Estado liberal y la democracia representativa: mutua autonomía Estado-sociedad; definición de la sociedad civil a través de su mecanismo característico, el mercado libre; formulación de la voluntad política en el seno del Estado como servidor de un presunto interés general; concepción instrumentalista del Estado, como sitio donde la sociedad hace llegar su voz sólo a través de representantes, los cuales gozan de autonomía en la gestión y no se ven obligados a dar cuenta de su labor a esa voz que lo erigió en hombre público.

Estos supuestos edificaron el lugar que ocupa el ciudadano en la esfera política, caracterizado por su exterioridad respecto del mundo de las decisiones públicas. La debilidad del elemento de control de la sociedad respecto del Estado en el proceso de representación, es un dato característico del Estado liberal de democracia representativa<sup>11</sup>. No puede dejárselo de lado entonces a la hora de tomar en cuenta que la sociedad civil que hoy formula ese discurso crítico se ha socializado políticamente dentro de ese esquema representativo. Las soluciones, los remedios que esgrime el malestar civil para salir de la actual crisis de la política se edifican sobre los supuestos, esto es, sobre los límites que la democracia delegada puso en juego al establecerse. Esto puede apreciarse en el hecho de que ninguna de las alternativas propuestas es capaz de revertir el lugar de exterioridad, de desconexión entre ciudadano y política, refrendado ideológica y funcionalmente en el esquema liberal por la escisión raigal entre Estado y sociedad.

En el campo de la representación liberal, la coexistencia de la autonomía del legislador y del control del ciudadano sobre éste se torna problemática, y se decanta en favor de la primera. El vínculo gobernante-gobernado inaugura la autonomía decisoria del legislador, y ésta a su vez mella ese vínculo precisamente por su carácter de decisión autosustentada, imposibilitada de consultar a esa voluntad que le dio origen. Incluso cuando la decisión adoptada autónomamente por el legislador sea aprobada por la ciudadanía, el vínculo se resiente: este golpe es acaso más sutil, pues se trata de un debilitamiento causado por el hecho de que la relación gobernante-gobernado se vuelve puro trámite instrumental, utilitarista: se apoya al legislador sólo porque sus decisiones satisfacen los intereses del elector,

---

<sup>11</sup>Antonio J. Porras Nadales, cit., p. 7.

pasando a segundo plano incluso que para ello sea necesario violar el contrato originario establecido con el gobernante, el contrato electoral representado por el programa partidario. El problema, tanto en el caso del acierto cuanto en el del desacierto, es que el control sólo puede darse con posterioridad a la decisión del legislador; se trata así de un control evaluado por los resultados<sup>12</sup>. Esto es lo que vuelve la relación gobernante-gobernado un mero lazo utilitario, instrumental, incapaz de comprometer vitalmente las convicciones y responsabilidades del ciudadano sobre los asuntos públicos. En fin, crea una relación de exterioridad entre ciudadanía y lo público, entre sociedad civil y política.

Esa exterioridad reproduce, en el campo de la política, la lejanía del consumidor en el terreno del mercado. En fin, hace del ciudadano un consumidor<sup>13</sup>, también en la esfera de lo político. Como en el mercado, la libertad del ciudadano se limita a un mero poder de veto. Como en el mercado, en el terreno político sólo cabe la elección negativa: la ciudadanía se pronuncia luego de que el tema en cuestión ya ha sido tratado, nunca durante o antes. Se puede decir lo que no se quiere, antes que lo que se desea.

Si hay algo que caracteriza el discurso y las conductas con que la sociedad civil responde ante la crisis de la política, es que alegan ir hacia un mayor control de ésta (acercar la política a la gente; situar a los partidos al servicio de la sociedad), pero acaban en la delegación completa, en el desentendimiento respecto de la gestión de lo público: elección de independientes sin contralor partidario ni programático y, por tanto, sin control civil; financiación privada de los partidos, esto es, ruptura de la autonomía política de la sociedad civil ante el mercado y el Estado, y descomposición de la noción de partido como instrumento de la voluntad de la sociedad.

La respuesta de la sociedad civil ante la crisis de la política tiene dos costados, que, aunque enlazados, no deben superponerse a la hora de ser evaluados. Por un lado, aparece un malestar respecto de lo dado y, por otro, una propuesta de solución de la crisis. La propuesta, por cierto, es un mal modo de canalizar ese malestar, pues - como se ha visto - su contenido redundaría en una vuelta atrás, en un retorno de la política a la época de los notables. No obstante, si sólo se evaluara la totalidad de la

<sup>12</sup>Tal como señala Porras Nadales, se establece un mecanismo al menos equívoco en este tema. En efecto, se supone que el momento de control de lo actuado es el turno electoral inmediato subsiguiente al fin del mandato. Pero, a la vez, por definición en toda elección se vota por el futuro, por programas que se proponen para gobernar el próximo turno gubernativo. Así, por tanto, en el momento de expresar su opinión sobre lo que ha pasado, el elector se ve constreñido por el juego electoral a votar por el futuro.

<sup>13</sup>C. B. Macpherson: cit., p. 14.

respuesta de la sociedad por su costado ideológico, de propuesta (lo cual, no obstante, hay que hacer), se correría el riesgo de no atender al malestar que en ella subyace. Y lo valioso de ese malestar, incluso mientras que - como ahora - se encuentra en un momento puramente negativo, de rechazo de lo dado, es que es capaz de sacar a la luz la problemática central de nuestros días: la de la crisis de legitimidad de las formas de la política actualmente existentes. Estas, desprovistas del suelo histórico sobre el que se levantaron y del cual se nutrieron, no pueden seguir siendo: la sociedad, a través de su malestar, ha planteado este problema, aunque, mediante sus propuestas, lo esté resolviendo de modo regresivo.

### ***Bibliografía***

- Benedicto, Jorge y Fernando Reinares (eds.): Las transformaciones de lo político, Alianza, Madrid, 1992.
- Cotta, Maurizio: «Representación política» en N. Bobbio y N. Mateucci (eds.): Diccionario de Política, Siglo XXI, México, 1988; pp. 1425-33.
- Macpherson, C. B.: La democracia liberal y su época, Alianza, Madrid, 1991.
- Offe, Claus: Contradicciones en el Estado del Bienestar, Alianza, Madrid, 1990.
- :Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Sistema, Madrid, 1992.
- Porras Nadales, Antonio J.: Representación y democracia avanzada, noviembre 1993, Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, (en prensa).